

# La política económica en el informe presidencial

De acuerdo con una larga práctica política, el primer informe presidencial es ocasión para presentar en forma más precisa y articulada el programa sexenal de gobierno. Al mismo tiempo, cada seis años se revisa la estrategia de desarrollo económico y social, para mantener la continuidad de un proyecto nacional cuyas líneas fundamentales se trazaron hace más de cuatro decenios. Con diferencias más o menos fuertes de matiz y de acuerdo con las circunstancias internas y externas, la divisa permanente ha sido el cambio, el ajuste de rumbo, sin romper frontalmente con el pasado.

De nueva cuenta el país ha llegado al periódico cruce de caminos, que en esta ocasión coincide con una etapa de prueba para la sociedad civil, urgida por la crisis económica a hacer congruente el conjunto de las medidas para salvar la coyuntura, con las políticas de largo plazo para reorientar la marcha de la economía.

El primer informe de esta administración parte del señalamiento de la crisis que vive México, en un contexto mundial igualmente grave. En lo sustantivo, el diagnóstico indica el agotamiento del modelo de desarrollo, cuyas contradicciones se agudizaron en los últimos años por una respuesta inadecuada a la necesidad social de mantener una alta tasa de crecimiento económico. La inversión pública trató de suplir la insuficiente acumulación privada, “frecuentemente con acierto y oportunidad; aunque otras veces sin orientación, sin proyectos útiles y en ocasiones sin contar con administración idónea”. El Estado fue incapaz de financiarse internamente en la medida necesaria y acudió al crédito externo “hasta que el mismo sistema financiero y las condiciones de su propio desastre lo limitaron. El ahorro disponible para inversión se redujo y, con ello, la oportunidad de que se hiciera inversión privada. Los dueños del dinero lo comprometieron en las actividades que les ofrecían menos riesgo: especulación y rentismo, o lo sacaron masivamente del país hacia donde todavía admiten capital, pero ya no trabajadores”.

El modelo de desarrollo se agotó por “las contradicciones entre el sector agropecuario comprimido y el sector industrial sobreprotegido; entre la economía rural sujeta a precios fijos y la economía urbana subsidiada; entre las necesidades de importación y la capacidad de exportación; entre la demanda de crecimiento de actividades productivas indispensables y las restricciones monetarias y crediticias; entre la exigencia de producción y la inducción inerte al lucro; entre los incentivos y canalización de la inversión privada y los mecanismos impositivos y de financiamiento público; entre la posibilidad de estabilizar precios y la flotación de la moneda; entre lo que debíamos producir y el derroche consumista del sector favorecido; entre lo que podíamos producir y nuestros hábitos de consumo, y lo que es más

grave: en muchas partes, pero particularmente en el campo, con frecuencia se contradijo la justicia con la eficiencia”.

La inflación, primero, y después el abandono de una paridad cambiaria sostenida durante 22 años fueron los síntomas más evidentes del resquebrajamiento económico. La respuesta a la crisis se guía por esos síntomas y por ello destacan los esfuerzos para frenar o cuando menos estabilizar el alza de precios y para reordenar el sector externo. En ese contexto se explica el reconocimiento presidencial de que “la inversión no está a la altura, en lo inmediato, de lo que hace falta y de lo que sería deseable; pero tenemos que actuar considerando la delicada situación económica en que se encuentra nuestro sistema”.

Por esa insuficiencia del gasto público, el Informe contiene aisladas menciones de grandes obras en marcha y se concentra en la explicación de los cambios cualitativos de la administración pública, así como de las políticas que habrán de seguirse en los próximos años, las cuales en alguna medida ya se han puesto en práctica.

La reforma administrativa y el impulso a la industria petrolera son los puntos de apoyo fundamentales de lo que podría calificarse como una política general de reconstrucción económica, que busca reencontrar la dinámica del crecimiento sobre nuevas bases. Para ello se intenta mejorar la organización del aparato productivo, elevar la producción y superar “la trampa del financiamiento”. Todo ello sin sacrificar la satisfacción de las necesidades sociales más apremiantes y sin perder de vista la calidad del desarrollo para llegar al “país que queremos ser”.

La primera fase de la reforma administrativa consistió principalmente en reagrupar por sectores diversas funciones gubernamentales, modificando la estructura de las secretarías y departamentos de Estado; a su vez, estas dependencias se constituyeron en “cabezas de sector”, a cuyo cargo quedó planear, coordinar y evaluar las actividades de las entidades paraestatales afines.<sup>1</sup> Pronto concluirá una segunda fase de la reforma: “instrumentar la coordinación operativa entre las dependencias coordinadoras del sector y las entidades paraestatales en ellos agrupadas”. Por último, se anunció en el Informe que habrá de seguir una fase de integración sectorial que permita articular un plan total de gobierno.

La eficiencia parece ser la preocupación inicial implícita en la reforma administrativa. No en balde la primera etapa se definió en el Informe en términos de “organizar al Gobierno para organizar al país”. Por otra parte, llegar a la planeación nacional despunta como la motivación más trascendente de dicha reforma, a fin de materializar los propósitos de congruencia del quehacer gubernamental. Y tanto la búsqueda de la eficiencia como la marcha hacia la planeación se relacionan de múltiples maneras con la política general de reconstrucción económica, pues significan, entre otras cosas, modificaciones a la organización del aparato productivo, menores costos, mayor solidez financiera, más y mejores servicios públicos y una capacidad superior de orientar el desarrollo por los senderos que la nación determine.

Algunos de estos propósitos están en la base de la política de “precios reales”. Esta busca liberar de abusos al consumidor sin dejar de fomentar la producción, en el entendido de que “sólo el Estado por sus funciones puede absorber subsidios al consumo, porque la carga que significan, orientada a un fin social o de interés general, se reparte entre todos”. Tampoco las empresas estatales deben soportar esas cargas. Por eso el Presidente señaló que se harán “explícitos los subsidios que por razones fundadas deban otorgarse, para que no se

1. Véase “Reorganización de la administración pública” y “Reforma administrativa”, en *Comercio Exterior*, vol. 26, núm. 12, México, diciembre de 1976, pp. 1378-1387 y vol. 27, núm. 5, mayo de 1977, pp. 542-549.

tache por ese concepto su rentabilidad". Además, de hecho hay una tendencia a reducir al mínimo indispensable esos subsidios, con la idea de que las transferencias del Gobierno deben orientarse en general hacia el conjunto de la población o de la economía; sólo en casos excepcionales y por períodos definidos, cabe beneficiar a grupos, regiones o actividades específicas, aunque con modalidades de apoyo que conduzcan a la desaparición de la necesidad del subsidio.

La disminución de los apoyos mencionados en último término es congruente con el lineamiento de acabar gradualmente con los excesos de la protección a la industria, sustituyendo el sistema de permisos de importación por el uso de aranceles, en un proceso de liberación comercial que no vaya en detrimento de la producción y que no grave demasiado a los consumidores.

Se trata de acabar con la "economía ficción", cuyos elementos principales son el subsidio y la protección que a menudo benefician a los menos en perjuicio de la mayoría, y que constituyen formas ineficientes de organización económica, que entre otros efectos producen debilidad financiera en el sector público y en las relaciones económicas con el exterior.

El Estado intenta fortalecer la situación financiera con el abandono de la economía ficción, un aumento del rendimiento del gasto público, una mejor administración del sector paraestatal, una mayor carga fiscal y una elevación considerable de la exportación de hidrocarburos y sus derivados. El objetivo es completar una nueva estructura financiera para mover al aparato productivo y salir de la crisis en condiciones que permitan sostener una adecuada tasa de crecimiento. Sin duda esto tiene una ponderación muy alta en la política económica, pues, como ya se dijo, el diagnóstico presidencial acerca de la presente situación identifica al problema financiero como el catalizador de la crisis.

Los puntos aquí comentados del programa de gobierno se vinculan de manera preponderante con la forma de operación del modelo económico. En ese sentido la enumeración no es completa, pues es evidente la omisión de la Alianza para la Producción. No se ha hecho referencia a ella porque su instrumentación ha estado relacionada fundamentalmente con la política de corto plazo, como fórmula para salir del "peor de los mundos posibles, inflación con recesión". Según la definición del Presidente, la Alianza para la Producción "es una fórmula que estamos proponiendo para resolver los aspectos inflacionarios de la crisis".<sup>2</sup>

Respecto a la teleología del modelo económico, en el Informe se reiteraron cuestiones importantes como el fortalecimiento del federalismo, la necesidad indispensable de hacer más justas las relaciones económicas, la búsqueda de la autodeterminación tecnológica y la prioridad que ha de darse en la industria a la producción de bienes de capital y de consumo básico.

Sin embargo, el planteamiento del contenido que debe tener el desarrollo parece todavía en proceso de definición. Así, por ejemplo, es necesario hacer explícito en qué proporción se orientará el crecimiento económico hacia el mercado externo, considerando que se ha postulado cierta liberación del comercio exterior, la orientación parcial o total hacia la exportación de varias ramas y el mantenimiento, por tiempo todavía indefinido, del tipo de cambio flotante. A la vez se han marcado directrices para fortalecer el mercado interno, tales como la producción de bienes de capital. Por ello, hace falta una formulación

2. Véase entrevista del grupo "20 Mujeres y un Hombre" al Presidente de la República, en *El Día*, México, 27 de septiembre de 1977, p. 8.

global de este renglón de la política económica, en la que se concilien ambas tendencias de manera explícita.

Otra cuestión de gran interés es el futuro petrolero del país. No sólo es necesario saber los montos de producción, exportación y de otras variables de la industria en sí misma. Hay que ahondar en el estudio de los efectos en el resto de la economía y de la sociedad, derivados del hecho de que “en pocos años México se convertirá en un productor petrolero de importancia relativa a nivel mundial”. Son tan altas las ganancias previstas de la exportación petrolera que es indispensable definir el mejor uso del excedente de esta actividad. La añeja experiencia de Poza Rica y la nueva del sur de Veracruz y de Tabasco, al llegar a ser regiones petroleras, sugieren la urgencia de planear adecuada y eficazmente el desarrollo integral de las zonas geográficas determinadas o fuertemente influidas por la economía de los hidrocarburos. La enumeración podría seguir pero lo importante es tomar en cuenta que muchas de las tendencias de las grandes variables económicas y sociales se modificarán radicalmente cuando sean muy cuantiosos los ingresos del petróleo, al grado de cambiar la naturaleza de la economía nacional. Por lo mismo, hay que apresurarse a revisar toda la política económica para no toparse con fenómenos indeseados que lleven a un puerto al que no se quiera llegar, o a un país que no se quiera ser. □

## La Conferencia de París: un diálogo difícil pero necesario

A mediados de septiembre se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, una asamblea de cuatro días destinada a evaluar los resultados de la Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional, más conocida como Diálogo Norte-Sur, cuya reunión final terminó en junio último en la capital francesa.<sup>1</sup> Los países subdesarrollados propusieron en Nueva York que se declarara fracasada la Conferencia de París, pero las naciones capitalistas industrializadas consiguieron detener la iniciativa. Finalmente, se llegó a un acuerdo que servirá para continuar el diálogo en otras instancias.

La declaración propuesta por los países subdesarrollados no fue sólo una manifestación de protesta por el escaso eco que encontraron en París sus exigencias en favor de un nuevo

1. Véase “El Diálogo Norte-Sur, o lo que no fue”, en *Comercio Exterior*, vol. 27, núm. 7, México, julio de 1977, pp. 830-835.

orden económico. Indudablemente, constituyó una forma de presionar a las naciones ricas para que éstas no olviden los graves problemas pendientes de solución en el Tercer Mundo y se avengan a la idea de que será necesario reordenar la economía internacional para lograr una distribución más equitativa de la riqueza, de los recursos y de las posibilidades del desarrollo económico.

Hasta no hace mucho tiempo los países avanzados ponían oídos sordos a las quejas y peticiones del mundo subdesarrollado. La ciencia económica tradicional y sus representantes más destacados todavía suelen proponer al Tercer Mundo un modelo de comportamiento económico inalcanzable, sin admitir —y quizá incluso sin sospechar, dado el velo ideológico que los envuelve— que el causante del subdesarrollo es el propio funcionamiento de la economía mundial, en el cual las naciones ricas desempeñan la parte decisiva.

En el presente decenio, el lento ritmo de crecimiento de las inversiones destinadas a desarrollar nuevas fuentes de energía y el acelerado e irracional consumo de lo que producen las ya existentes elevaron los costos de los combustibles y fortalecieron la capacidad de negociación de los países productores de petróleo. Los precios del crudo aumentaron en escala insospechada y, con ellos, los de todos los insumos energéticos. La inestabilidad de los precios, propia de todo período de auge, se vio súbitamente fortalecida por la alteración de la economía de los energéticos, y la inflación en las naciones avanzadas se desbocó. Los países capitalistas industrializados entraron en una fase de estancamiento con inflación y de creciente angustia por asegurarse el acceso a nuevos yacimientos, a costos compatibles con el funcionamiento normal de la economía.<sup>2</sup> Como las fuentes más abundantes de energía están localizadas en el Tercer Mundo, los ricos —por primera vez en la historia— se presentaron como peticionarios ante las naciones económicamente menos favorecidas. Entonces pareció darse la posibilidad de que los países subdesarrollados fueran escuchados en los foros internacionales, ya que tenían algo que ofrecer a cambio de sus propias demandas.<sup>3</sup>

Ya se sabe de qué manera las naciones capitalistas industrializadas trataron de fraccionar el bloque del Tercer Mundo, para discutir el problema energético exclusivamente con los países productores. De triunfar en tal empeño, esa estrategia les habría permitido sortear las dificultades sin hacer concesiones generalizadas, concentrándose en tratar con muy pocos interlocutores y sólo los problemas y situaciones que los preocupaban. Afortunadamente, los países productores de petróleo comprendieron que aumentarían su capacidad de negociación si el problema de la energía se discutía en el marco de las posiciones comunes del Tercer Mundo. De esa manera, después de algunas sugerencias que no prosperaron y de una reunión preparatoria, comenzó en París el Diálogo Norte-Sur, bautizado así, no sin cierto dejo de neocolonialismo, por los medios internacionales de difusión.

Es fácil caer en el escepticismo cuando se trata de conferencias convocadas con la intención de reformar el sistema socioeconómico y político imperante. La experiencia de ese tipo de reuniones, en las que “dialogan” dominantes y dominados, a menudo sin romper el encasillamiento de sus respectivas posiciones, así como la evolución de la reciente recesión mundial revelan, cada vez con mayor crudeza, que las declaraciones ampulosas que

2. Véase “Londres: sin novedad para el Tercer Mundo”, en *Comercio Exterior*, vol. 27, núm. 5, México, mayo de 1977, pp. 519-522.

3. Véase “Petróleo: antes y después de la reunión de Qatar”, “La OPEP y el nuevo orden económico” y “Reunión de la OPEP en Estocolmo: grandes cambios sin modificar los precios reales”, en *Comercio Exterior*, vol. 27, núms. 1 y 8, México, enero y agosto de 1977, pp. 88-96, 884-887 y 969-973, respectivamente.

prometen instaurar el reino de la justicia para todos suelen ser palabras que se lleva el viento y que rara vez llegan a concretarse en medidas efectivas tendientes a modificar la relación de cosas existente. La permanencia del *statu quo*, por otra parte, no es más que un reflejo de la fuerza de los poderosos y de la escasa repercusión, en términos de poder económico y político, de las naciones más débiles. Visto desde esa perspectiva, el actual orden podría parecer inmovible o sólo susceptible de modificarse mediante violentos estallidos de fuerza.

Sin embargo, las cosas distan mucho de ser tan sencillas o tan ominosas. Por una parte, el propio funcionamiento de la economía internacional ha fracturado en más de una oportunidad al bloque de las naciones ricas. La crisis y la "revolución" de los precios del petróleo las ha obligado a discutir ciertos aspectos del orden mundial por ellas controlado. Por otro lado, los recientes esfuerzos de los países del Tercer Mundo, a menudo exitosos, en favor de posiciones unificadas frente a los países ricos, les ha permitido emprender negociaciones mejor respaldadas y, por tanto, más eficaces. Si se percibe con agudeza el carácter de estas modificaciones, se verá que no han surgido como algo extraño al orden internacional, sino como una consecuencia de la propia evolución de la economía mundial. Desde esta perspectiva, el nuevo orden económico internacional empieza a ser, hasta cierto punto, una necesidad que se perfila cada vez con mayor claridad y que podría llegar a modificar la suerte de los países subdesarrollados. Empero, se precisa que los dirigentes de estos países cobren plena conciencia de la situación, que fortalezcan sus vínculos solidarios, que exista una amplia uniformidad de criterio para encarar el reordenamiento económico y que las fórmulas generales de reivindicación frente a los ricos se plasmen en propuestas concretas, susceptibles de engarzarse en la dinámica de la economía internacional de nuestros días.

Ideológicamente, el mundo capitalista desarrollado se guía por normas que proclaman la libertad de los precios y de los mercados, pero la realidad de la economía mundial dista mucho de acatar esos principios. Los cárteles internacionales controlan las ramas más importantes de la industria, y en el mercado mundial no hay precios libres de la influencia y gravitación de los monopolios. Además, junto a la concentración del capital privado, surge invariablemente la acción cada vez más importante de las empresas públicas y de los controles estatales. Monopolio y mercados controlados constituyen la realidad de los países avanzados, realidad que no ha surgido como una elección de mecanismos, sino como una simple evolución de la economía moderna. Los países subdesarrollados también han debido defender muchas veces sus economías mediante controles estatales, precios dirigidos y empresas públicas. Empero, con estas acciones siguen muchas veces un curso no compatible con los intereses de los monopolios, lo que los expone a las amonestaciones o a las represalias de los organismos internacionales de crédito dominados por los países ricos.

Desde otro ángulo, el nacimiento del nuevo orden económico internacional debe buscarse en las iniciativas, aisladas, todavía no sistematizadas en escala mundial, destinadas a contrarrestar la acción de los monopolios y a limitar la vigencia de los precios libres, que, en realidad, no son más que los precios fijados por las necesidades de acumulación de los monopolios, dentro de ciertas condiciones generales impuestas por la demanda. La economía de los monopolios no obstaculiza el desarrollo de los países centrales, pero, librada a su propia dinámica, genera en la periferia una fragmentación descomunal de la economía, que deteriora el ritmo de inversión, la distribución del ingreso y el uso racional de los recursos, obstruyendo el crecimiento, generalizando la pobreza y consolidando el subdesarrollo.

Hasta hace poco tiempo era virtualmente imposible que la opinión pública de los países

capitalistas desarrollados comprendiera esta situación. No obstante, la recesión internacional de 1974-1975, las crisis monetarias que la precedieron y el problema energético levantaron renovadas críticas a la acción de los monopolios en los países avanzados y revitalizaron proyectos e iniciativas tendientes a neutralizar su fuerza. En el país más poderoso del mundo, la discusión sobre el plan energético enfrentó en muchos aspectos a los monopolios con las decisiones presidenciales. Todos estos antecedentes obligan a prever, ahora, la posibilidad de un reordenamiento económico internacional que limite y controle la acción de los monopolios y sus efectos, pero no ya como una reivindicación exclusiva de la periferia, sino como una necesidad que abarca también a los países capitalistas industrializados.

Así, el nuevo orden económico internacional se originará, fundamentalmente, en una limitación del poder de los monopolios privados. La estabilización de los precios de las materias primas en niveles que permitan dinamizar la economía de los países subdesarrollados podría acarrear, desde luego, una pérdida relativa de ingreso para los habitantes de los países industrializados. Empero, no son los habitantes sino las empresas transnacionales las que más resisten los cambios, porque ellos implican, en muchos casos, una disminución de su rentabilidad o un menor control del mercado. En la medida en que exista una más cabal comprensión de que no siempre el capital de los monopolios ha servido para desarrollar inversiones productivas, sino que a menudo fomenta el desplazamiento masivo de fondos y la inestabilidad monetaria, y que ha sido incapaz de promover, con suficiente antelación, las inversiones destinadas a neutralizar la menor disponibilidad de ciertas materias primas o insumos, como sucedió en el caso de la energía, y que esa conducta tiene consecuencias muy onerosas para los consumidores de todo el mundo, habrá más posibilidad de lograr apoyo para aquellas medidas destinadas a intentar un ordenamiento controlado del mercado mundial.

En torno al proyecto del nuevo orden económico internacional siempre ha habido una gran dosis de incredulidad por parte de amplios sectores de la opinión mundial progresista. Muchos de tales objetantes creen que no hay posibilidad de cambios sustanciales dentro del actual sistema económico. Empero, los hechos están demostrando que, librada a su propia dinámica, la economía mundial conduce a la guerra comercial, al paro crónico, a la recesión periódica, a la inseguridad de las propias inversiones y a la creciente desigualdad internacional. Por otra parte, la historia de los últimos tiempos está llena de acontecimientos imposibles de imaginar pocos años atrás. El reordenamiento económico internacional a que dio lugar la modificación de los precios del petróleo es un ejemplo de ello; la inconvertibilidad áurea del dólar es otro.

La propia dinámica económica internacional exige y provoca una creciente intervención de los poderes públicos nacionales e internacionales, a fin de corregir las tendencias espontáneas del mercado. Si el libre juego de dichas tendencias lleva a la paralización de la economía, no queda más remedio que corregir el proceso espontáneo, dando paso a la orientación dirigida con un criterio político. Esta práctica se lleva a cabo en todos los países capitalistas industrialmente avanzados, no sólo en el ámbito de sus propias economías internas, sino también en el mercado mundial. Algunos de los ejemplos más contundentes de lo dicho son la inconvertibilidad áurea del dólar y la división del mercado del oro que la precedió, así como el deseo de los países avanzados de fijar el precio del petróleo no en el mercado, sino en la mesa de negociaciones. La actividad financiera y monetaria internacional de la actualidad está llena de medidas de este tipo. Entonces, ¿por qué los países subdesarrollados deben ser los únicos que se sometan a las tendencias espontáneas del mercado, a la acción deteriorante de precios a la baja o a una implacable ortodoxia monetaria que no sigue siquiera el país cuya moneda oficia de patrón internacional del valor?

El nuevo orden económico internacional, que los países capitalistas industrializados ya han empezado a poner en marcha para ellos, debe extenderse por consiguiente a todo el mundo. Y cuando los precios de las materias primas lleguen a ser mínimamente satisfactorios y sus variaciones puedan regularse por consenso político, el resultado será, en efecto, el comienzo de un nuevo orden económico internacional. No es cierto que la economía mundial pueda funcionar sólo a partir de tendencias espontáneas. La propia experiencia de los países avanzados lo demuestra y esta idea, de naturaleza esencialmente política, es la que —de una u otra manera— ha estado sometida a debate a lo largo de la Conferencia de París. La preocupación de los países industrializados por mantener el diálogo revela también que una parte del poder de decisión radica en el Tercer Mundo. Para ejercerlo se necesita avanzar desde el terreno de las exigencias generales hacia la formulación de políticas cada vez más precisas y homogéneas, capaces de entroncarse en la dinámica económica internacional del presente. Es cierto que muchas iniciativas originadas en la periferia fueron finalmente desvirtuadas por los países centrales. También lo es, que de su aplicación sólo surgieron beneficios para muy pocos países subdesarrollados, mientras que la situación de la mayoría no se modificó o, incluso, empeoró. La crisis del petróleo puede servir, una vez más, como ilustración. No obstante, ello se ha debido a que las discusiones en torno al uso de la energía como factor de presión para obtener una distribución internacional más justa de los ingresos quedó reservada a los poseedores de los recursos y a que no ha habido intento alguno de formular una estrategia homogénea y que se base en el pleno consenso de todo el mundo periférico.

A la luz de las reflexiones anteriores puede abarcarse la confrontación Norte-Sur desde una perspectiva más optimista, con mayores posibilidades de vigencia política. El diálogo de París no ha logrado sus objetivos. Sin embargo, no hay que olvidar que los más preocupados por evitar el rompimiento de las negociaciones han sido los países avanzados. Eso indica que la posibilidad de instaurar un nuevo orden económico internacional no es una utopía, sino —más bien— una compleja y difícil tarea de negociación. Como tal, y dado su vasto alcance, seguramente no marchará con la rapidez que el mundo subdesarrollado desea. Exigirá tenacidad y constancia por parte de éste, pero también inteligencia y creciente capacidad de concreción. Sin embargo, es preciso recordar que apenas dos años atrás parecía muy difícil comprometer a los países capitalistas industrializados en los esfuerzos para crear un fondo común de estabilización de los precios de las materias primas. En Nairobi (1976) y, finalmente, en París (1977), se lograron avances de gran importancia, cuya consolidación tendrá que buscarse en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Fatalmente, los acuerdos parciales obtenidos serán interpretados de diversa manera por los países ricos y por las naciones subdesarrolladas, pero la negociación existe. La extrema inflexibilidad de los países industrializados indica con claridad cuán difíciles serán esas negociaciones. Y no es para menos: cada concesión al Tercer Mundo, por leve que sea, es una pequeña desarticulación del complejo sistema de intereses laboriosamente montado a través de la estructura económica internacional de la posguerra, que representa —como es obvio— una modalidad de conveniente acumulación para las empresas transnacionales.

Pese a los esfuerzos conservadores, el equilibrio económico de la posguerra se está haciendo trizas. Se abre, por consiguiente, una etapa en que será ineludible llegar a resultados concretos en las negociaciones. Los países periféricos tendrán mucho que ganar en la batalla si comprenden cabalmente el alcance de esta perspectiva, logran una homogeneidad mínima para presionar a los intereses dominantes en la economía mundial y, sobre todo, acrecientan sus esfuerzos solidarios en busca de soluciones cooperativas de conjunto. Todo ello sin perder de vista que, dada la interdependencia planetaria, es imposible reorganizar el comercio y la vida económica internacionales sin la participación de todos, países industrializados y no industrializados, por igual. □